

Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que don Christian Sergio Melis Valencia, abogado, en representación de la “Empresa de Transporte Ferroviario S. A.”, presentó recurso de queja en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de Copiapó, ministra señora Aída Osses Herrera y ministros señores Pablo Krumm de Almozara, Antonio Ulloa Márquez y Juan Antonio Poblete Méndez, por cuanto, con falta o abuso grave, declararon inadmisibles el de nulidad que interpuso con la finalidad de invalidar la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras de Vallenar, que rechazó la reclamación judicial por ilegalidad de la resolución pronunciada por la Inspección Provincial del Trabajo Huasco-Vallenar, que desestimó la solicitud de reconsideración de la multa impuesta por un fiscalizador de esa repartición, por infracción a lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

La recurrente sostiene que la única causal propuesta en el recurso de nulidad, es la del artículo 477 del Código del Trabajo, por cuanto el fallo de la instancia incurrió en infracción a lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley N°19.799 y 1699 del Código Civil, tal como se desprende de la argumentación que desarrolla, precisando que la mención que efectúa al artículo 478 letra c), es sólo un error de referencia, que no altera su comprensión, por cuanto atribuye al fallo de base una errada interpretación de aquellas disposiciones y describe como influyó sustancialmente en lo dispositivo, de forma que esa aislada indicación, no afecta el sentido unívoco de la denuncia planteada; razones por las que solicita la invalidación del dictamen recurrido y se declare admisible el referido arbitrio.

**Segundo:** Que, al evacuar el informe de rigor, los jueces recurridos sostuvieron que no incurrieron en falta o abuso grave al decidir la inadmisibilidad del recurso de nulidad, puesto que constataron que no cumplía las exigencias previstas en el inciso final del artículo 480 del Código del Trabajo, en especial, por carecer de fundamentos de derecho, por cuanto invocó las causales de sus artículos 477 y 478 letra c), sin precisar si las deducía conjunta o subsidiariamente, exigencia coherente con el carácter de derecho estricto del referido arbitrio, suficiente para desestimarlo *in limine*, puesto que tal confusión obligaba a discernir, en perjuicio de la parte recurrida, cuál se entendía



interpuesta, infringiendo la imparcialidad que exige la labor jurisdiccional, concluyendo, por tanto, que su decisión fue correcta, considerando el mandato contenido en la primera disposición citada.

**Tercero:** Que la reglamentación del recurso de queja se contiene en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, en especial, en su párrafo primero, bajo el epígrafe de “Las facultades disciplinarias”, requiriéndose, para su procedencia, que en la resolución que lo motiva, se incurra en falta o abuso grave, es decir, en errores u omisiones, manifiestos y trascendentes, defecto que, por definición, debe tener influencia decisiva en su parte dispositiva (Barahona Avendaño, José Miguel, “El recurso de queja. Una Interpretación Funcional”, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40).

**Cuarto:** Que del mérito de los antecedentes agregados a la carpeta digital, se advierte que la resolución recurrida no es de aquellas que se puedan corregir a través del presente arbitrio, por cuanto el de nulidad fue desestimado por los jueces recurridos en la etapa de admisibilidad, por su defectuosa formulación, atribuyendo un determinado sentido a la expresión “*careciere de fundamentos de derecho*” que se contiene en el inciso final del artículo 480 del Código del Trabajo, relacionado con la necesaria coherencia interna de sus fundamentos, puesto que, tratándose de un medio de impugnación de derecho estricto, entendieron que la preceptiva que lo reglamenta se debe cumplir rigurosamente, requisito que no fue observado por la reclamante, tras constatar evidentes contradicciones, según advirtieron de la sola lectura de la segunda página del referido arbitrio, defecto que impedía compartir la pretensión de univocidad planteada por la recurrente.

**Quinto:** Que, del mérito de los antecedentes, se advierte que la empresa reclamante sostiene que el recurso de nulidad que presentó en contra de la sentencia de base se sostiene en una única causal, que es la de carácter genérica del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a dos determinadas normas, que entiende evidente si se elimina la referencia resaltada en un recuadro a la de su artículo 478 letra c), transcrita bajo el epígrafe “causal de nulidad invocada”. Sin embargo, aun admitiendo la supresión de aquella referencia, la recurrente no explica otra de las observaciones que se contienen en la resolución impugnada, en el segundo párrafo del apartado IX, cuando alude a que la sentencia “*ha calificado jurídicamente que mi representada no exhibió documentación, siendo que sí lo hizo, de manera física y material, mediante documentos digitalizados*



*impresos de ella misma con firma digitalizada*”, propuesta que contiene un evidente cuestionamiento a la calificación jurídica de los hechos asentados, planteamiento coherente con el carácter normativo de valoración de la causal y de adecuación del marco fáctico a una determinada regla, labor que exige una actividad interpretativa del derecho aplicable, referencia que, por tanto, fractura la línea de razonamiento propuesta por la reclamante.

**Sexto:** Que la exigencia de precisión es especialmente necesaria en este caso, porque, como se desprende del tenor del recurso de nulidad y de los antecedentes acompañados, la discusión que la recurrente pretendía trasladar a la Corte de Apelaciones, quedó en alguna medida circunscrita a la de determinar el carácter auténtico de los documentos que entregó al fiscalizador, asunto que, *prima facie*, exige definir su naturaleza jurídica y, por tanto, no sólo se limita a revisar la correcta interpretación de las normas que cita, dualidad que resta sustento a la argumentación que desarrolla, advirtiéndose que su errónea formulación sí tiene asidero, por lo que no se advierte concurrente el supuesto que denuncia y que se deba corregir por esta vía.

**Séptimo:** Que, en tal sentido, se constata que en el arbitrio se impugna la interpretación que los jueces recurridos entregaron al inciso final del artículo 480 del Código del Trabajo, puesto que el carácter de derecho estricto del recurso de nulidad, reclama a quien lo intenta que sea formulado con la debida rigurosidad, ya que procede sólo en los casos taxativos establecidos en la ley, concluyendo que la vaguedad descrita, impide aceptar la alegación de la recurrente, quien debió deducirlo en forma clara y precisa, de la que dependerá el alcance de la revisión y competencia permitida al tribunal competente.

**Octavo:** Que, en consecuencia, no se configura la falta o abuso que se denuncia, por cuanto, según se observa, la judicatura cuestionada se limitó a aplicar la normativa referida, por lo que el presente arbitrio constituye, más bien, una expresión de la disconformidad de la recurrente con la interpretación entregada por el tribunal al inciso final del artículo 480 del Código del Trabajo, que, como se ha dicho, no es controlable por esta vía, razón suficiente para concluir que el intentado debe desestimarse.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se declara que **se rechaza** el recurso de queja interpuesto en contra de los ministros recurridos de la Corte de Apelaciones de Copiapó en la dictación de la decisión de dieciséis de diciembre de dos mil veinte.



Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°150.394-20.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., y los abogados integrantes señor Gonzalo Ruz L., y señora Leonor Etcheberry C. No firma el abogado integrante señor Ruz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, diez de mayo de dos mil veintidós.



En Santiago, a diez de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

